Campesinado, haciendas y Estado en México: 1856-1914*

Juan Felipe Leal

1. Planteamiento inicial

A pesar de una vieja y rica tradición de Occidente —cultivada especialmente por poetas, literatos y políticos—, el mundo campesino ocupa un lugar histórico que poco tiene que ver con la mítica Arcadia, el bucolismo y el romance. En efecto, los “campesinos” y su “mundo” se caracterizan y definen en el curso histórico por su inserción en un universo de relaciones —económicas, sociales, políticas, ideológicas y militares— que siempre trasciende a la vida aldeana, al folklore local, al solar familiar. Esta vinculación de los trabajadores del campo a una sociedad más vasta, ocurre a través de su subordinación a las clases y grupos sociales que dominan y dirigen a esta última. Tal subordinación garantiza la transferencia de un excedente económico del campesinado a los núcleos sociales históricamente dominantes.

Ahora bien, dentro de su enorme diversidad, dicha subordinación induce procesos muy complejos de diferenciación entre los trabajadores rurales, lo cual torna excesivamente genérico e insustancial al término “campesino”; al menos para el lenguaje científico. Esta diferenciación se convierte, asimismo, en un aspecto crucial para cualquier estudio que pretenda dar cuenta del papel que desempeñan los “campesinos” en los procesos de cambio; esto es, cuando se atiende a la acción —económica, social, política, ideológica y militar— de éstos, sobre el sistema global que los envuelve y subordina.

El análisis de la relación que se observa en el mundo moderno y contemporáneo entre los aparatos públicos de dominación y los “campesinos” es, sin duda alguna, central para comprender las modalidades de subordinación de estos últimos y para delimitar los mecanismos de explotación que se hallan en uso. En las páginas que siguen nos ocuparemos de perfilar —así sea esquemáticamente— el carácter de dicha relación durante la vigencia del primer Estado nacional mexicano; esto es, entre 1856 y 1914.

2. Variaciones originales

Entre 1640 y 1940, la hacienda fue la unidad productiva que predominó en el campo mexicano, y en torno a ella giró toda la problemática agraria.

Ciertamente, las haciendas del centro de México surgieron a mediados del siglo XVII una vez que el episodio de la encomienda se había eclipsado y que el repartimiento forzoso de indios había entrado también en decadencia. Para entonces la población indígena había dismi-

* Una versión abreviada de este texto se publicó en: *Así fue la revolución mexicana, T. I. Crisis del porfirismo*, México, Senado de la República-Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 35-46.

nuido notablemente y la política de congregación de indios había conducido a la reestructuración económica y política de sus pueblos, con base en patrones castellanos. Estos acontecimientos permitieron una redistribución general de recursos entre indios y españoles. Unos y otros recibieron mercedes reales que amparaban sus respectivas posesiones y les garantizaban su usufructo. Sin embargo, mientras que los títulos de los primeros conservaron su naturaleza de concesiones públicas hasta bien entrado el siglo XIX, los títulos de los segundos se fueron transformando durante el siglo XVII, hasta adquirir el carácter de propiedad particular, al menos en los hechos. Esto suscitó la formación de un incipiente mercado de títulos, que propició la concentración de la propiedad española y el nacimiento de las grandes haciendas. Con todo, las haciendas no se consolidaron como tales sino hasta el momento en el que lograron crear un sistema propio de atracción, fijación y reposición de trabajadores: el peonaje por deudas. Este sistema les permitió contar con trabajadores permanentes y redujo su dependencia de la mano de obra de los pueblos, que se conservó, pero ya sólo con un carácter eventual o estacional.

Las haciendas nacieron para satisfacer la demanda de productos agropecuarios de los mercados urbanos y mineros, que los pueblos de indios no podían ya cubrir. Se organizaron con recursos provenientes de las encomiendas, los puestos públicos, la minería y el comercio. Pero, simultáneamente, emergieron con fuertes tendencias autárquicas que apuntaban hacia la obtención del mayor grado de autoabasto posible. Esta racionalidad económica buscaba vender lo máximo y adquirir lo mínimo por vía monetaria. Y ello no sólo por la escasez de circulante que connotó a los siglos XVII, XVIII y XIX, sino, sobre todo, porque éste era un mecanismo que permitía la valorización de excedentes producidos en condiciones económicas muy distintas.

El proceso de formación de las haciendas en otras regiones de la Nueva España fue, en muchos sentidos, distinto del que describimos para el centro del virreinato. En las zonas mineras del norte, entre Querétaro y Parral, las haciendas surgieron en sitios carentes de población sedentaria, en los que la encomienda y el repartimiento forzoso de indios tuvieron una implantación muy reducida y extremadamente frágil, la política de congregación de indios experimentó fracaso tras fracaso, no se fundaron pueblos como en el centro y el sur de la colonia, ni se vivió el fenómeno de la concentración de la propiedad española, pues desde el principio se mercedaron enormes extensiones territoriales. Allí, el reclutamiento de trabajadores representó siempre un problema crucial, que se enfrentó con sistemas de esclavitud, repartimiento forzoso de indios, trabajo asalariado y peonaje endeudado, en las más diversas combinaciones. Estas haciendas se articularon, directa o indirectamente, con distintos complejos mineros. Se orientaron a la producción de granos, carne y otros géneros menores, que abastecían a las minas de su circunscripción.

En las regiones periféricas a los centros mineros del norte se instalaron haciendas ganaderas que, además de producir pieles, sebo y carnes para mercados distantes, cultivaban la tierra para autoabastecer a la población que en ellas residía. En el extremo norte, entre Parral y Santa Fe, a lo largo del Camino de Tierra Adentro, se erigieron haciendas-presidios y haciendas-cuarteles, para resguardar la frontera de las incursiones de los indios nómadas.

En el sur y el sureste de la Nueva España las haciendas aparecieron

tardíamente, y esto por la vida tan prolongada que tuvieron las encomiendas. No obstante, el proceso de su formación fue, en términos generales, bastante similar al que siguieron las haciendas del centro. Las haciendas de Oaxaca, Chiapas y Yucatán fijaron a sus trabajadores permanentes por medio del peonaje endeudado, y reclutaron a sus trabajadores estacionales de los numerosos pueblos aledaños, aplicando en ello distintas modalidades de enganchamiento compulsivo. Estas haciendas estuvieron estrechamente ligadas con los mercados que representaban las villas y ciudades españolas, y eran, a la vez, cerealeras y ganaderas.

En las regiones tropicales de las costas y el interior no se establecieron haciendas, sino plantaciones.

La especialización de las haciendas en ciertas producciones para el mercado (presente ya en sus disímiles orígenes históricos) se produjo, a la vez, dentro de cada región. Así, por caso, en el centro de México se perfilaron tres tipos distintos de haciendas: las cerealeras, las pulqueras y las azucareras. El fenómeno de especialización de las haciendas se acentuó en el último tercio del siglo XVIII y se desplegó de manera inusitada en las postrimerías del siglo XIX.

3. Características distintivas

A pesar de la gran variedad de haciendas que hubo, puede hablarse de la hacienda mexicana en general, en la medida en que todas y cada una de ellas contaban con una matriz básica, constante y característica; aunque, desde luego, cambiante.

En efecto, la hacienda era una propiedad rústica que cumplía con un conjunto específico de actividades económicas (agrícolas, pecuarias, extractivas, manufactureras); que contenía una serie de instalaciones y edificios permanentes; que tenía una administración y un sistema contable relativamente complejos; que mostraba cierto grado de autonomía jurisdiccional *de facto* respecto del poder público, y que se fundaba en el peonaje por deudas para el desempeño de sus funciones. Este último era, sin duda, el rasgo distintivo de dichas unidades productivas.

Otra característica importante que formaba parte de la matriz hacendista era la racionalidad económica de la explotación de sus tierras y aguas. Estas solían dividirse en tres sectores bien diferenciados, contradictorios, pero complementarios: un sector de explotación directa, un sector de explotación indirecta y un sector de reserva.

El *primer sector* estaba constituido por las mejores tierras: aquellas que eran húmedas o que podían ser irrigadas, que estaban mejor ubicadas y comunicadas, o bien que contaban con los mejores suelos. Este sector era explotado directamente por la administración de la finca (mediante el peonaje endeudado y el peonaje libre) y constaba, a su vez, de dos áreas: una destinada a la producción para el mercado y otra orientada a la producción para el autoabasto. El *segundo sector* estaba formado por las tierras pobres o carentes de infraestructura. Estas se cedían en arrendamiento, aparcería o colonato a campesinos que no tenían tierras suficientes, o bien que carecían absolutamente de ellas. De él obtenía la administración del fundo rentas en dinero, en especie o en trabajo. La existencia de este sector estaba determinada, al menos en parte, por la necesidad que tenían las haciendas de contar con trabajadores adicionales en determinados momentos del ciclo agrícola, que no siempre podían reclutar de los pueblos de la vecindad, particularmente

en el norte del país. El *tercer sector* consistía en tierras no explotadas, que se conservaban en calidad de reserva y que tenían funciones muy importantes, como enseguida veremos.

Cuando ocurría una ampliación sostenida del mercado o un alza constante de los precios de los productos agropecuarios, las haciendas extendían el sector de explotación directa, reduciendo el sector de explotación indirecta o, preferiblemente, el sector de reserva. Por el contrario, cuando se presentaba una contracción sostenida del mercado o una baja constante de los precios de los productos agropecuarios, las haciendas reducían el sector de explotación directa, ampliando el sector de explotación indirecta. En resumidas cuentas, las haciendas respondían a las fluctuaciones de los mercados y de los precios modificando las proporciones de los tres sectores que las conformaban. Ahora bien, en casos de auge inusitado, las haciendas podían verse precisadas a ampliar su extensión territorial (legal o ilegalmente), para establecer una relación óptima entre sus tres sectores, o bien, para asegurarse más mano de obra eventual.

De hecho, las haciendas pueden caracterizarse como unidades económicas fundamentalmente mercantiles, en las que la producción para el autoabasto se encontraba supeditada a la producción de mercancías. Aunque la producción comercial de las haciendas no era la única que en ellas se generaba, sí era la que determinaba la dinámica entera de su economía.

La valorización de los excedentes que se producían en las haciendas tomaba la forma de una renta, por cuanto confluían (de manera indivisible) rentas en dinero (en el caso de los arriendos de tierras en monetario); rentas en especie (en el caso de los productos que entregaban los aparceros a cambio del usufructo de porciones de tierra de las haciendas); rentas en trabajo (que se obtenían del aprovechamiento del trabajo esencialmente no asalariado de los colonos y los peones endeudados); la renta de la tierra (tanto absoluta como diferencial) que se fijaba en los precios de venta en el mercado de los productos agropecuarios, y, por último, una plusvalía absoluta, que resultaba de la explotación del trabajo generalmente asalariado de los peones eventuales.

En cuanto a la matriz de las haciendas mexicanas, cabe señalar que con el correr del tiempo, pero sobre todo a partir de la revolución liberal, comenzó a experimentar alteraciones importantes, que prefiguraron su total transformación. Por una parte, y en respuesta a los estímulos del mercado, las haciendas tendieron a ampliar sus sectores de explotación directa, reduciendo notablemente sus sectores de explotación indirecta y de reserva. Por otra parte, y bajo los mismos estímulos, las haciendas tendieron a ampliar sus áreas destinadas a la producción para mercado, restringiendo las que estaban orientadas a la producción para el autoabasto. Este comportamiento, que en sí mismo no era novedoso, exhibía, no obstante, rasgos inéditos.

Lo peculiar del comportamiento del sistema hacendista en el periodo que corre de 1856 a 1914 consistió en el carácter sostenido e irreversible que asumió el fenómeno apuntado. Si antes del triunfo de la revolución liberal las haciendas vivían etapas de expansión, éstas eran limitadas y, regularmente, sucedidas por etapas de contracción que restablecían el equilibrio temporalmente perdido entre las haciendas y los minifundios, internos o externos a ellas. Después de la Reforma, el fenómeno de la expansión económica y física de las haciendas no se interrumpió más.

4. Los pueblos y el Estado

Como fruto de la política de congregación de indios entre 1550 y 1620 surgieron las comunidades agrarias llamadas pueblos.

El patrón de asentamiento prehispánico, caracterizado por chozas campesinas desparramadas entre los campos de cultivo y los cerros sin formar núcleos compactos, se acentuó por el impacto disruptor que la conquista ejerció en la relación cabecera-sujeto que antiguamente privaba entre la población mesoamericana. Esta circunstancia dificultaba a los españoles el control de los indígenas, la sustracción de tributos y trabajadores, y la obra de evangelización. Cuando a ello se sumó la drástica caída de la población, surgió la política de congregación, junta o reducción de indios. El propósito primordial de esta política consistió en reducir en policía o gobierno a la población que estaba dispersa, reasentándola en centros trazados y organizados a la usanza castellana.

Dichas medidas tuvieron dos grandes tirones, con características relativamente distintas. El primero ocurrió entre 1550 y 1564, siendo virrey Luis de Velasco; el segundo, entre 1593 y 1605, bajo la administración del virrey Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey. Ambos jalones sucedieron a sendas epidemias, que diezmaron a la población indígena. La primera ola de congregaciones estuvo en manos de órdenes mendicantes y los indios fueron reasentados en lugares próximos a los que habitaban, sin llegar, por ello, a perder las tierras que originalmente poseían. La segunda ola de reducciones quedó a cargo del clero secular o del gobierno civil y los indios fueron reubicados a grandes distancias, lo que se tradujo en numerosas ocasiones en la pérdida de sus anteriores posesiones. De manera que si las primeras congregaciones no se vieron directamente asociadas con la codicia de la tierra indígena por parte de los españoles, las segundas obedecieron al claro propósito de aumentar la cantidad de tierras baldías, para que éstas pudieran ser mercedadas a los europeos.

Múltiples y muy complejos fueron los efectos que las medidas de congregación de indios tuvieron. Aquí sólo queremos destacar que éstas se combinaron con el proceso que paralelamente se desenvolvía, de reemplazo de las instituciones de gobierno indígenas por las castellanas. De esta suerte, fue muy frecuente que la reducción de indios en tales o cuales pueblos coincidiera con la constitución de sus respectivos cabildos y con la delimitación de nuevas jurisdicciones territoriales. Como es claro, una vez congregada la población, definida la cabecera y sus sujetos y establecido el ayuntamiento en la primera, se abrió la posibilidad de vincular con mayor orden y concierto a las comunidades de indios con las instancias centrales del gobierno español en América (los corregidores o alcaldes mayores, las audiencias, el virrey, el protector de indios, el juzgado de indios, etcétera) y de reorganizar el sistema de tributos, mediante la sustitución del régimen de encomiendas por el de repartimiento forzoso de indios.

Ya hechas las congregaciones, se inició el proceso de consolidación económica de los pueblos, a través de la configuración de sus tierras por vía de mercedes reales, como antes se apuntó. Las tierras que así se otorgaron se componían de la siguiente forma: a) tierras de comunidad, consistentes en aguas, pastos y bosques de común aprovechamiento; b) tierras de propios, cuyos frutos servían para solventar los gastos del ayuntamiento; c) tierras de común repartimiento, que se asignaban en parcelas de usufructo familiar; d) solares en el casco urbano del pue-

blo, que se adjudicaban a los vecinos para que allí residieran y pudieran explotar, a la vez, huertas, aves y cerdos.

Cabe señalar que las tierras de comunidad no se explotaban en común. Cada familia cumplía en ellas una cuota determinada de trabajo, pero sus frutos alimentaban las cajas de comunidad, cuyo aprovechamiento sí era común. El manejo de las mismas estaba en manos del cabildo o ayuntamiento, el cual resolvía sobre la aplicación de estos fondos. Sin embargo, con el transcurso del tiempo más y más autoridades españolas fueron teniendo injerencia en el manejo de las cajas de comunidad, hasta que a finales de la época colonial quedaron prácticamente controladas por ellas.

El caso fue que las haciendas y los pueblos de indios se articularon de manera compleja y variadísima en el curso de los siglos XVII, XVIII y XIX.

Así, el cuadro político de la Nueva España estaba marcado por una profunda división: la esfera de las repúblicas o ayuntamientos de indios y la esfera de las repúblicas o ayuntamientos de españoles. Cada una se gobernaba, en su base, en forma totalmente independiente de la otra. Eran los alcaldes mayores o corregidores el eslabón que las integraba en un plano superior con las instancias centrales del gobierno español.

Bajo esta óptica, los alcaldes mayores o corregidores cumplían con un doble papel: por una parte, conciliaban los intereses, comúnmente encontrados, de las repúblicas de indios y las repúblicas de españoles; por otra parte, armonizaban los intereses, asimismo contradictorios, de los pueblos de indios y las villas de españoles con los de la Corona. Para ello, estaban investidos de facultades que les permitían supervisar el gobierno, la procuración de la justicia (civil y penal) y el manejo de los fondos de los ayuntamientos, tanto de indios como de españoles, dentro de las jurisdicciones de su competencia. Por último, mas no por ello menos importante, los alcaldes mayores o corregidores estaban encargados de la recolección de tributos y del reclutamiento y la distribución de trabajadores en los pueblos en los que ejercían su autoridad.

En 1786 se promulgó la Real Ordenanza de Intendentes, que sustituyó a las viejas estructuras político-administrativas de los Habsburgos (tan imbuidas de la heterogeneidad casual medieval) con el modelo altamente centralizado, uniformado y sistemático de los Borbones. Con esto desaparecieron los reinos, las provincias mayores, las alcaldías mayores o corregimientos, que fueron reemplazados por doce intendencias, divididas, a su vez, en subdelegaciones. Los subdelegados de intendencia eran nombrados por el intendente y ratificados por el virrey. Tenían prácticamente las mismas funciones que los alcaldes mayores o corregidores, aunque, a diferencia de éstos, formaban parte de una estructura centralizada con base en criterios sistemáticos y eficientistas. Así las cosas, al paso del tiempo los subdelegados fueron incrementando sus funciones fiscalizadoras sobre la vida de los ayuntamientos de indios y de españoles. En más de un sentido, los subdelegados de intendencia representaron un antecedente de los prefectos políticos que surgieron en 1812 con la Constitución de Cádiz, cuya existencia se prolongó en México hasta la segunda década del siglo XX.

Por lo antes visto, el tránsito del orden colonial a los primeros esbozos del Estado nacional mexicano planteó en el plano social la necesidad de superar la división estamental o de "castas" y de reemplazarla por la figura clasista de la ciudadanía. De ninguna manera queremos decir con esto que no hubiera habido clases sociales durante la colonia.

Las hubo y bien decantadas, en la medida en la que las relaciones de producción que se establecieron entre unos y otros grupos humanos suponían la exacción de un excedente económico. Lo que deseamos resaltar aquí es la visión que la sociedad colonial tenía de sí misma (a la luz de las ideologías de sus clases dominantes), por lo que hace a la jerarquización de sus distintos componentes sociales. En otras palabras, la manera como percibía, razonaba y justificaba la diferenciación y la desigualdad social.

Pues bien, originalmente se trató de una imagen fundada en criterios religiosos y raciales, que dio lugar a una segregación y a un aislamiento que, según Pérez Barradas, llegó a contar con 103 categorías. Sin embargo, el sistema de “castas” novohispano (cuya mayor vigencia se situó en el siglo XVII) nunca fue tan rígido como sus marcos ideales nos podrían hacer pensar. En efecto, la transformación económica y la continua combinación genética diluyeron en mucho a las “castas”, y en un plazo relativamente corto. Así, el elemento racial fue perdiendo algo de su peso como criterio de distinción social. Ya a finales del siglo XVIII otro tipo de valores (la propiedad, los ingresos, la profesión) ocuparon el primer lugar para marcar las jerarquías sociales. Con todo, la discriminación racial subsistió. Aunque la revolución de independencia nacional no barrió en forma drástica y definitiva con el pesado legado colonial, los cambios jurídicos y políticos que se anunciaron con la Constitución de 1824, contribuyeron a impulsar el paso de una sociedad estamental a una sociedad civil.

Otra de las grandes cuestiones que el incipiente Estado nacional mexicano hubo de enfrentar y resolver, fue la supervivencia de las corporaciones civiles y eclesiásticas, que impedían su propia estructuración y consolidación. En consecuencia, desde 1824 los gobiernos de ciertos estados de la república federal emprendieron la disolución de algunas corporaciones y de desamortización de sus bienes. Esta política se intensificó en los años de 1833 y 1834, cuando el embate en contra de las corporaciones se instituyó en programa del gobierno nacional. Si bien el “golpe de Estado” de 1835 y la implantación de la república central interrumpieron este proceso, no lograron, empero, revertirlo. La caída de la dictadura de Santa Anna y la reinstauración de la república federal, en 1855, despejaron la vía para la continuación de la Reforma.

Así, el gobierno liberal expidió el 25 de junio de 1856 la Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas Propiedad de las Corporaciones Civiles y Religiosas, mejor conocida como *Ley Lerdo*. Con ella se buscaba poner fin a los derechos corporativos de propiedad, liberar de sus trabas de inalienabilidad a los bienes de las antiguas corporaciones, e imponer las formas de la propiedad privada. De acuerdo con esta ley los bienes de las corporaciones civiles o eclesiásticas debían adjudicarse en propiedad privada a quienes los tenían arrendados, por el valor correspondiente a la renta que pagaban, calculada como rédito al seis por ciento anual. En el caso de que dichos bienes no se hallaran arrendados por algún particular, debían ser puestos en subasta pública al mejor postor.

La Iglesia fue la corporación que más rápidamente resultó afectada por la nueva legislación. En un lapso sumamente breve se desamortizaron gran cantidad de bienes inmuebles de su propiedad, consistentes en edificios destinados al culto o a la educación, así como tierras que habían pasado a sus manos por donación o compra, y tierras dedicadas al sostenimiento del culto por los mismo vecinos de los pueblos y que la Iglesia usufructuaba.

Por lo que hace a las corporaciones civiles, los bienes que poseían los ayuntamientos en las ciudades, villas y pueblos, también fueron desamortizados con relativa celeridad. De esta forma, las tierras llamadas del "propio" (esto es, pertenecientes a los ayuntamientos) pasaron a manos de sus arrendatarios, o fueron puestas en subasta pública al mejor postor. Sólo los edificios municipales que estaban en servicio público quedaron exentos de ser enajenados. Por contraste, los terrenos de común repartimiento y los ejidos (o terrenos de comunidad) de las corporaciones indígenas fueron afectados con cierta lentitud. En el caso de los primeros, los vecinos de los pueblos debían denunciar ante las autoridades sus propias parcelas de cultivo para que éstas les fueran adjudicadas a título de propiedad privada. En el caso de los ejidos, bosques y pastos, éstos debían asignarse (también a título de propiedad privada) entre los vecinos de los pueblos, respetando los respectivos derechos anteriores de los mismos.

La adjudicación de estos bienes implicaba inicialmente el pago de un impuesto por concepto de traslado de dominio equivalente al cinco por ciento del valor del inmueble. No obstante, poco tiempo después se expidió la circular del 9 de octubre de 1856 con el objeto de facilitar y acelerar la ejecución de la ley liberal. En ella se ordenaba que todo terreno valuado en menos de doscientos pesos (ya fuera de común repartimiento o del "propio") debía ser adjudicado sin el pago de la alcabala o de cualquier otro impuesto. Ya que la mayoría de dichos terrenos tenían un valor inferior a tal cantidad, su adjudicación se volvió gratuita.

De esta suerte, las haciendas y los ranchos que pertenecían a la Iglesia, así como las tierras de las corporaciones indígenas, fueron directamente afectadas por la Reforma. No ocurrió lo mismo, sin embargo, con las haciendas que estaban en poder de propietarios privados, a pesar del encendido debate que sobre ello tuvo lugar en el Congreso Constituyente de 1856-1857.¹

Posteriormente y como complemento de la *Ley Lerdo*, las administraciones de Benito Juárez (1863), Sebastián Lerdo de Tejada (1875), Manuel González (1883) y Porfirio Díaz (1894) se empeñaron en legislar sobre la enajenación de terrenos baldíos para ponerlos a disposición de diversos proyectos de colonización. La paulatina modificación de los criterios que en su origen inspiraron a estas leyes, terminó por conferir derechos casi ilimitados a las compañías deslindadoras de terrenos, que se mostraron sumamente activas entre 1883 y 1909, especialmente en el norte de México.²

Lo cierto es que la hacienda laica fue la única institución colonial que sobrevivió a la revolución liberal de mediados del siglo XIX, aunque hubo de operar en un nuevo marco histórico a partir de entonces. Ciertamente, la formación y consolidación de un Estado nacional, la orga-

¹ Veáanse: Ponciano Arriaga, "Voto particular sobre la propiedad, presentado al Congreso Extraordinario Constituyente (23 de junio de 1856)" e Isidoro Olvera "Proyecto de ley orgánica sobre el derecho de propiedad, presentado al Congreso Extraordinario Constituyente (7 de agosto de 1856)", en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (compiladoras), *La Revolución Mexicana. Textos de su Historia*, t. I. *El antiguo régimen. Manifestaciones de rebeldía*, México, Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora-Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 17-45 y 51-62, respectivamente.

² Veáanse: Manuel González, "Decreto del Ejecutivo sobre colonización y compañías deslindadoras (15 de diciembre de 1883)" y Manuel Fernández Leal, "Ley sobre ocupación y enajenación de terrenos baldíos (26 de marzo de 1894)", en *idem*, p. 171-178 y 179-198, respectivamente.

nización de un sistema bancario y la extensión del crédito agrícola, el incremento masivo de la inversión extranjera, la ampliación de la red ferroviaria, el nuevo código mercantil, la supresión de las aduanas interiores, la constante depreciación de la plata (que estableció un proteccionismo *de facto* a la producción interna), la creciente monetarización de la economía, el paso de las crisis agrícolas de subproducción a las de sobreproducción, el aumento de la población y su redistribución en el territorio nacional, las nuevas fuentes de energía y la innovación tecnológica, y la importación de maquinaria y equipo, entre otros cambios, incidieron en la ampliación e integración de los mercados interiores y exteriores y proporcionaron incesantes estímulos a la expansión hacendista.

Con ello tuvo lugar una fractura en la anterior racionalidad económica de las haciendas (particularmente notable en el centro del país), que se manifestó en una creciente especialización y comercialización de sus producciones, en un debilitamiento de sus capacidades de autoabasto, en una marcada reducción de sus sectores de explotación indirecta y de reserva y en una tendencia hacia su expansión territorial.

Estas mutaciones suscitaron ciertos cambios en las relaciones de producción que caracterizaban a las haciendas. En primer lugar, los trabajadores permanentes de las fincas (dependientes y peones endeudados) tendieron a perder peso e importancia en relación con los trabajadores ocasionales o estacionales (peones libres). En segundo lugar, en distintos momentos, pero particularmente a partir de 1912, se registraron múltiples intentos por sustituir la tradicional forma de pago de los trabajadores permanentes (de suyo compleja) por el salario jornalero, todo en efectivo y semanalmente cubierto. Así, se eliminaron los pagos en especie, el mecanismo de la cuenta anual y el endeudamiento de los peones. Sin embargo, la reducción al salario de estos trabajadores no fue completa; además del salario que se les empezó a pagar, se les cedieron porciones regulares de tierra en las haciendas para que las cultivaran en provecho propio, a cambio de la obligación de laborar permanentemente en las fincas. En tercer lugar, los trabajadores de los sectores de explotación indirecta (arrendatarios, aparceros, colonos, precaristas) tendieron a ser expulsados, en la medida en que las tierras que antes usufructuaban iban siendo incorporadas a los sectores de explotación directa de los fundos. En adelante estos trabajadores habrían de buscar empleo como jornaleros. Por último, la expansión territorial que muchas de las haciendas vivieron en estos años se efectuó a costa de ranchos y minifundios colindantes o aledaños; cuyos propietarios fueron desposeídos por distintos medios e impulsados a engrosar las filas de los jornaleros. No está de más señalar que las tendencias antes referidas no actuaron con la misma intensidad y sincronía en todas las haciendas mexicanas. Hubo una enorme variedad de comportamientos de estas unidades productivas, pero, en mayor o en menor grado, éstos se ajustaron a la dinámica que hemos expuesto.

5. El primer Estado nacional mexicano

Entre 1856 y 1914 rigió el primer Estado nacional mexicano, cuya forma hemos caracterizado como liberal-oligárquica. Esta modalidad de Estado contenía una contradicción interna que le era propia y distintiva. En efecto, se trataba de una combinación eficiente de dos tendencias encadenadas, aunque encontradas.

Por un lado, en el plano de las relaciones jurídico-políticas, era liberal. Sancionaba la igualdad legal y política de los ciudadanos y la libertad de pensamiento y de cultos. Concebía al individuo como el principio rector de la sociedad y a sí mismo como simple garante y promotor de los intereses de los particulares. Adoptaba la forma de una república democrática, representativa y federal. Se organizaba conforme a una división de poderes —ejecutivo, legislativo, judicial—, con predominio del Congreso de la Unión. Se proponía establecer el librecomercio en lo interno y en lo externo, y pugnaba, además, por eliminar las diferentes variantes de trabajo endeudado, compulsivo o gratuito y sustituirlas por el trabajo asalariado libre.

Por otro lado, en el plano de las prácticas políticas imperantes, era oligárquico. Era la expresión político-administrativa de los compromisos acordados por las oligarquías —regionales o locales— más importantes del país. De ahí la persistencia de formas precapitalistas de producción, particularmente en el campo. De ahí el predominio de estructuras sociales y políticas impregnadas de matices estamentales y raciales. De ahí la imperancia de formas clientelistas como el caciquismo y el caudillismo. De ahí, también, la inexistencia de partidos políticos y la organización de la dominación por vía del control oligárquico directo de las diversas ramas del aparato estatal. De ahí, finalmente, la tendencia hacia la dictadura del titular del poder ejecutivo federal. Sus pilares de apoyo eran la violencia institucional y el consenso pasivo de la mayoría de las clases dominadas, canalizado y encarnado en la eficacia política de las clases propietarias.

Sería un equívoco pensar que de los dos términos de esta contradicción —liberal-oligárquico—, el primero era apenas de importancia aparente y que el segundo era el verdaderamente significativo. En realidad, ambos aspectos, aunque jamás con el mismo peso, eran fundamentales, puesto que constituían una unidad de compromiso que no podía descomponerse en sus partes integrantes sin romper con la unidad misma.

Ahora bien, la contradicción inherente al primer Estado nacional mexicano asumió formas específicas en distintos momentos, según el grado de desarrollo alcanzado por el capitalismo en el país, la naturaleza de la dependencia del exterior, la composición del bloque en el poder, y la clase —o fracción de clase— que detentó la hegemonía del mismo. Desde este punto de vista, y a grandes rasgos, pueden distinguirse cuatro intervalos durante la vigencia del Estado liberal-oligárquico.

El primero corrió de 1856 a 1880, aproximadamente. Se caracterizó por la creación de ciertos mecanismos para la redistribución de los factores de producción —tierra y fuerza de trabajo, principalmente—, así como por la instauración de un poder público relativamente autonomizado de la sociedad civil y de las clases, fracciones y grupos que la conformaban. Se trataba de un aparato estatal todavía poco organizado en sus aspectos administrativo y financiero que, además, debía hacer frente a una pesada deuda interna y externa. Se estaba ante un poder público urgido en consolidar al bloque de las clases dominantes, para poder hacer efectiva la centralización política, administrativa, fiscal y militar. Así y todo, en este periodo se registró la iniciación de la construcción ferroviaria, la restricción de los derechos alcabalarios y la ampliación y articulación —aunque modesta— de los mercados: de tierras, productos agropecuarios, manufacturas, capitales y fuerza de trabajo. El polo dinamizador de este intervalo se situó en el impacto de las leyes de Reforma y en el proceso de acumulación originaria.

El segundo cubrió los años de 1880 a 1896. Quedó connotado por la operación de una serie de cambios institucionales, que modificaron el acceso a los recursos naturales —terrenos baldíos y yacimientos minerales—, al sistema impositivo y a la organización empresarial. En él se dieron los pasos más decisivos para la creación de un mercado nacional y para la incorporación de México al capitalismo internacional de la segunda revolución industrial. El incremento de las inversiones extranjeras, el *boom* ferrocarrilero, la expansión de las exportaciones, la abolición de las alcabalas, el desarrollo de las fuerzas productivas en ciertas ramas de la actividad económica —comunicaciones y transportes, minería y metalurgia, industria de transformación, agricultura de exportación—, la creciente monetarización de la economía y la agudización de los contrastes sociales, dibujaron el cuadro de estos años de progreso y orden. El Estado reposó en un heterogéneo bloque dominante, que logró incorporar a la mayor parte de las clases y grupos de propietarios, tanto de la capital como de la provincia, lo cual se tradujo en el asentamiento de un poder federal consistente, con capacidad de actuar eficazmente sobre el conjunto de la economía y la sociedad. Aunque la acumulación originaria continuó realizándose, el polo dinámico de este periodo se localizó en la acumulación capitalista industrial, particularmente en el complejo minero-exportador.

El tercero abarcó los años de 1896 a 1905. En él el país mantuvo un crecimiento sostenido, aunque con tasas inferiores a las de los años precedentes. Ya a la vuelta del siglo la economía mexicana hubo de encarar serias dificultades. La depresión internacional de 1900-1901 puso fin a la época dorada de las exportaciones. El comercio mundial cambió por aquellos años en su composición y en su dinámica. En 1905 se reajustó la política monetaria para buscar la estabilidad mediante su vinculación al patrón oro. Con ello se terminó con el proteccionismo *de facto* que había prevalecido durante los anteriores treinta años, por la constante depreciación de la plata. Este reajuste hizo que la estrategia de industrialización que una fracción de la burguesía mexicana —la *científica*— estableció hacia finales del porfirismo se colocara en una situación incierta y que se desvanecieran las ventajas monopolistas de que disfrutaban los hacendados que producían para el mercado doméstico.

El cuarto y último se extendió de 1905 a 1914. En este intervalo tuvo lugar la crisis internacional de 1906-1907, que repercutió en México en la quiebra de un sinnúmero de pequeños fabricantes, en protestas obreras y en enfrentamientos entre grupos oligárquicos provinciales y grupos financieros capitalinos. En fin, en este periodo se asistió al agotamiento del modelo minero-exportador; fórmula que garantizaba los intereses del capital extranjero, de una relativamente débil y muy fraccionada burguesía nativa, y de los grandes hacendados. Puesto que la dictadura se mostró incapaz de encontrar una salida a la crisis, el bloque dominante comenzó a desintegrarse hasta desmoronarse por completo, ante la embestida de la insurrección popular.³

³ Para un tratamiento más detallado del tema, véase: Juan Felipe Leal, "El Estado y el bloque en el poder en México: 1867-1914", en *Historia Mexicana*, vol. XXIII, núm. 4, México, El Colegio de México, abril-junio 1974, p. 700-722.

6. La controversia sobre la gran propiedad territorial

Durante los últimos años del porfirismo se desplegó e hizo manifiesta una profunda contradicción entre las estructuras agrarias vigentes (esencialmente serviles) y las estructuras urbano-industriales, sujetas al impulso de un capitalismo renovado por ciertas medidas de la política económica gubernamental. El hecho fue que la coexistencia de ambas realidades se fue haciendo incompatible, no sólo en sus implicaciones económicas, sino sobre todo en sus consecuencias sociales y políticas.

En efecto, desde los días de mayor auge y esplendor del porfirismo empezaron a formularse las primeras críticas sistemáticas al régimen agrario fundado en la gran propiedad territorial. Tal fue el caso de la obra *Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos* del jalisciense Winstano Luis Orozco, publicada en 1895. La conclusión de esta erudita investigación (que comprende desde las Leyes de Partidas hasta los últimos decretos de la Secretaría de Fomento) se sintetizaba en dos conceptos básicos: "la propiedad agraria bien repartida contribuye eficazmente a la prosperidad y el bienestar de las sociedades", mientras que "las grandes acumulaciones de tierra bajo una sola mano, causan la ruina y la degradación de los pueblos".⁴

La crítica de Orozco al latifundismo y su arenga en favor de la pequeña propiedad rural influyó en la formación intelectual de nutridos grupos de jóvenes de la pequeña burguesía y de las capas medias urbanas, y fue recogida por los autores del Manifiesto y Programa del Partido Liberal Mexicano (del 1 de julio de 1906) en los siguientes términos:

La falta de escrúpulos de la actual Dictadura para apropiarse y distribuir entre sus favoritos ajenas heredades, la desatentada rapacidad de los actuales funcionarios para adueñarse de lo que a otros pertenece, ha tenido por consecuencia que unos cuantos afortunados sean los acaparadores de la tierra, mientras infinidad de honrados ciudadanos lamentan en la miseria la pérdida de sus propiedades. La riqueza pública nada se ha beneficiado y sí ha perdido mucho con estos odiosos monopolios. El acaparador es un todopoderoso que impone la esclavitud y explota horriblemente al jornalero y al mediero; no se preocupa ni de cultivar todo el terreno que posee ni de emplear buenos métodos de cultivo, pues sabe que esto no le hace falta para enriquecerse: tiene bastante con la natural multiplicación de sus ganados y con lo que le produce la parte de sus tierras que cultivan sus jornaleros y medieros, casi gratuitamente. Si esto se perpetúa ¿cuándo se mejorará la situación de la gente de campo y se desarrollará nuestra agricultura?

Para lograr estos dos objetos no hay más que aplicar por una parte la ley del jornal mínimo y el trabajo máximo, y por otra la obligación del terrateniente de hacer productivos todos sus terrenos, so pena de perderlos. De aquí resultará irremediamente que, o el poseedor de inmensos terrenos se decide a cultivarlos y ocupa miles de trabajadores y contribuye poderosamente a la producción o abandona sus tierras o parte de ellas para que el Estado las adjudique a otros que las hagan producir y se aprovechen de sus productos. De todos modos, se obtienen los dos grandes resultados que se pretenden: primero, el de proporcionar trabajo, con la compensación respectiva a numero-

⁴ Winstano Luis Orozco, *Legislación y jurisprudencia sobre terrenos baldíos*, México, imprenta de "El Tiempo", 1895, t. II, p. 952.

sas personas, y segundo, el de estimular la producción agrícola. Esto último no sólo aumenta el volumen de la riqueza general sino que influye en el abaratamiento de los productos de la tierra.

Esta medida no causará el empobrecimiento de ninguno y evitará el de muchos. A los actuales poseedores de tierras les queda el derecho de aprovecharse de los productos de ellas, que siempre son superiores a los gastos de cultivo; es decir, pueden hasta seguir enriqueciéndose. No se les van a quitar las tierras que producen beneficios, las que cultivan, aprovechan en pastos para ganado, etc., sino sólo las tierras improductivas, las que ellos mismos dejan abandonadas y que, de hecho, no les reportan ningún beneficio. Y estas tierras desperdiciadas, quizá por inútiles, serán, sin embargo, productivas cuando se pongan en manos de otros más necesitados o más aptos que los primitivos dueños. No será un perjuicio para los ricos perder tierras que no atienden y de las que ningún provecho sacan, y en cambio será un verdadero beneficio para los pobres poseer estas tierras, trabajarlas y vivir de sus productos. La restitución de ejidos a los pueblos que han sido despojados de ellos es de clara justicia.

La Dictadura ha procurado la despoblación de México. Por millares, nuestros conciudadanos han tenido que traspasar las fronteras de la Patria, huyendo del despojo y la tiranía. Tan grave mal debe remediarse, y lo conseguirá el Gobierno que brinde a los mexicanos expatriados las facilidades de volver a su suelo natal, para trabajar tranquilamente, colaborando con todos a la prosperidad y engrandecimiento de la Nación.

Para la cesión de tierras, no debe haber exclusivismos; deben darse a todo el que las solicite para cultivarlas. La condición que se impone de no venderlas tiende a conservar la división de la propiedad y a evitar que los capitalistas puedan de nuevo acaparar terrenos. También para evitar el acaparamiento y hacer equitativamente la distribución de las tierras se hace necesario fijar un máximo de las que se pueden ceder a una persona. Es, sin embargo, imposible fijar ese máximo, mientras no se sepa aproximadamente la cantidad de tierras de que pueda disponer el Estado para distribución entre los ciudadanos.

La creación del Banco Agrícola, para facilitar a los agricultores pobres los elementos que necesitan para iniciar o desarrollar el cultivo de sus terrenos, hace accesible a todos el beneficio de adquirir tierras y evita que dicho beneficio esté sólo al alcance de algunos privilegiados.⁵

Tanto Winstano Luis Orozco como sus seguidores desconocían la racionalidad económica de las haciendas (por ejemplo, ignoraban las relaciones de complementaridad que guardaban los sectores de explotación directa, de explotación indirecta y de reserva, de las mismas), por lo que su crítica al latifundismo fue, en muchos aspectos, externa a la lógica que regulaba los comportamientos de estas unidades productivas. Sin embargo, ello no impidió que acertaran en sus apreciaciones sobre los efectos sociales y políticos que el régimen de la gran propiedad territorial inevitablemente producía. Sea como fuere, propusieron: la restitución de ejidos a los pueblos que los hubiesen perdido, por despojo o por una amañada aplicación de las leyes de baldíos y coloniza-

⁵ Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia, Antonio I. Villarreal *et al.*, "Programa del Partido Liberal Mexicano, proclamado en San Luis Missouri, E. U. A. (1 de julio de 1906)", en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (compiladoras), *op cit.*, p. 323-325.

ción; la reducción a salario de los trabajadores que se empleaban en los sectores de explotación directa de las haciendas, con la consiguiente eliminación del peonaje por deudas; la reglamentación de los contratos de arrendamiento y aparcería, para evitar abusos de los hacendados y beneficiar a los trabajadores que se ocupaban en los sectores de explotación indirecta de las fincas; el fraccionamiento de los sectores de reserva de estas últimas y su distribución (en parcelas de extensión determinada y de carácter inalienable) entre quienes quisieran cultivarlos; la creación de un banco de crédito agrícola, que apoyara los esfuerzos de los campesinos parcelarios.⁶

El caso fue que hacia 1909, cuando apareció el libro *Los grandes problemas nacionales*, de Andrés Molina Enríquez,⁷ había tomado cuerpo ya una corriente de pensamiento que, habiendo partido de los marcos del liberalismo y, sobre todo, del positivismo, se había nutrido con la creatividad del derecho patrimonial de la Corona española, dando lugar a una novedosa concepción del Estado, la economía y la sociedad. De acuerdo con ella, la propietaria originaria del suelo y el subsuelo era la nación, cuyo representante legítimo era el Estado federal, quien tenía el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dictara el interés público. Puesto que la propiedad de la tierra era el principal problema nacional, era de interés público el fraccionamiento de los latifundios y el fomento a la pequeña propiedad agraria.

Con todo, las armas de la crítica habían cedido lugar a la crítica de las armas. Así, a pesar de su naturaleza eminentemente político-militar, el plan que se firmó el 5 de octubre de 1910 en la ciudad de San Luis Potosí sostenía en su artículo tercero:

Abusando de la ley de terrenos baldíos, numerosos pequeños propietarios, en su mayoría indígenas, han sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaría de Fomento, o por fallos de los tribunales de la República. Siendo de toda justicia restituir a sus antiguos poseedores los terrenos de que se les despojó de un modo tan arbitrario, se declaran sujetas a revisión tales disposiciones y fallos y se les exigirá a los que los adquirieron de un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, a quienes pagarán también una indemnización por los perjuicios sufridos. Sólo en caso de que estos terrenos hayan pasado a tercera persona antes de la promulgación de este Plan, los antiguos propietarios recibirán indemnización de aquéllos en cuyo beneficio se verificó el despojo.⁸

A principios de abril de 1911, Luis Cabrera (quien había ejercido la profesión de abogado en sociedad con Andrés Molina Enríquez) publicó un notable artículo periodístico. En él se propuso analizar la materia del conflicto armado que vivía el país, las reformas legislativas que debían hacerse, y las bases para una posible transacción entre el gobierno porfirista y la revolución maderista.

En lo relativo a las causas del conflicto señaló:

La prensa semioficial comenzó sosteniendo que la actual perturba-

⁶ *Idem.* p. 331-333.

⁷ Andrés Molina Enríquez, *Los grandes problemas nacionales*, México, Imprenta de A. Carranza e Hijos, 1909, 363 p.

⁸ Francisco I. Madero, "Plan de San Luis Potosí. (En el que se convoca al pueblo a tomar las armas para derrocar al gobierno, 5 de octubre de 1910)", en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (compiladoras), t. III, *Acción Revolucionaria*, *op. cit.*, p. 24

ción de la paz se debía a la ambición personal de Madero y de sus amigos; pero las proporciones alarmantes que ha tomado la Revolución han hecho comprender que el verdadero origen del movimiento revolucionario es un gran malestar social respecto del cual el levantamiento de Madero no fue más que el reactivo que lo puso en fermentación.

Las principales causas de descontento que la opinión pública ha podido precisar, clasificadas según su origen aparente, son las siguientes:

El caciquismo: o sea la presión despótica ejercida por las autoridades locales que están en contacto con las clases proletarias, y la cual se hace sentir por medio del contingente, de las prisiones arbitrarias, de la ley fuga, y de otras múltiples formas de hostilidad y de entorpecimiento a la libertad de trabajo.

El peonismo: o sea la esclavitud de hecho o servidumbre feudal en que se encuentra el peón jornalero, sobre todo el enganchado o deportado del sureste del país, y que subsiste debido a los privilegios económicos, políticos y judiciales de que goza el hacendado.

El fabriquismo: o sea la servidumbre personal y económica a que se halla sometido de hecho el obrero fabril, a causa de la situación privilegiada de que goza en lo económico y en lo político el patrón, como consecuencia de la protección sistemática que se ha creído necesario impartir a la industria.

El hacendismo: o sea la presión económica y la competencia ventajosa que la gran propiedad rural ejerce sobre la pequeña, a la sombra de la desigualdad en el impuesto, y de una multitud de privilegios de que goza aquella en lo económico y en lo político y que producen la constante absorción de la pequeña propiedad agraria por la grande.

El cientificismo: o sea el acaparamiento comercial y financiero y la competencia ventajosa que ejercen los grandes negocios sobre los pequeños, como consecuencia de la protección oficial y de la influencia política que sus directores pueden poner al servicio de aquéllos.

El extranjerismo: o sea el predominio y la competencia ventajosa que ejercen en todo género de actividades los extranjeros sobre los nacionales, a causa de la situación privilegiada que les resulta de la desmedida protección que reciben de las autoridades y del apoyo y vigilancia de sus representantes diplomáticos.⁹

Por lo que hace a las reformas legislativas que debían realizarse, Cabrera propuso, en materia agraria, las que siguen:

La creación de la pequeña agricultura es un problema vital, pero de larga solución. Por ahora lo único urgente es que las autoridades locales y federales emprendan una serie de reformas y medidas administrativas, encaminadas a perfeccionar los catastros para poner sobre un pie de igualdad ante el impuesto a la grande y la pequeña propiedad rural; y aun tal vez convendría dar ciertas ventajas a la pequeña propiedad sobre la grande.

Más tarde se estudiarán los medios económicos de desmembración de la gran propiedad rural, así como los de evitar el desmorona-

⁹ Luis Cabrera, "La solución del conflicto" (*La Opinión*, Veracruz, 18 y 19 de abril de 1911), en *idem*, p. 67-68.

miento de ciertas propiedades comunales que es un error haber desintegrado.¹⁰

Inconforme con los acuerdos de mayo de 1911, que firmaron en Ciudad Juárez los representantes de la dictadura y los de la revolución maderista,¹¹ Andrés Molina Enríquez intentó promover un movimiento insurreccional en el mes de agosto de ese mismo año. Para tal efecto, redactó un Plan que bautizó con el nombre de la población de Texcoco, lo adicionó con varios decretos, y esperó confiadamente que muchos serían los mexicanos que lo acompañarían en su empresa. Los periódicos de la época dieron cuenta del acontecimiento e hicieron públicos los principios y objetivos del Plan. Así, en *El Imparcial* del viernes 25 de agosto de 1911 se leyó:

Un nuevo movimiento revolucionario estuvo a punto de estallar el día 23 en la cercana población de Texcoco, al frente de la cual debía figurar el señor licenciado Andrés Molina Enríquez, muy conocido en los círculos intelectuales y políticos de México ...

La intentona a que nos referimos fue oportunamente denunciada a la policía y varios agentes de la secreta salieron en automóvil rumbo a Texcoco con el fin de ponerse sobre el hilo del asunto y proceder a la aprehensión de los principales complicados en el movimiento. Se llegó a decir que el señor Molina Enríquez contaba con multitud de partidarios, sobre todo entre la gente campesina, a quien de toda preferencia halagó con un próximo repartimiento de tierras; de aguas para crear de ese modo una clase de pequeños propietarios.

A reserva de ampliar nuestra información sobre este escandalosísimo asunto, damos en seguida un extracto del Plan de Texcoco, con el cual se ha hecho reo del delito de rebelión el señor Molina Enríquez...

Plan de Texcoco. El licenciado Molina Enríquez expuso sus ideas en los impresos que contiene ... y reconoce en el primer término, como la causa determinante de las revoluciones los motivos económicos del pueblo, diciendo que la pasada revolución, que aparentemente usó el lema Sufragio Efectivo-No Reección para echar abajo al gobierno del señor general Díaz, en realidad fue consumada con el propósito de mejorar las condiciones económicas nacionales trastornadas por el *ensanchamiento de la propiedad rural grande*, por la disminución del cultivo consiguiente a ese ensanchamiento y por el caciquismo general de la República.

El mejoramiento económico de México se hubiera conseguido, si la revolución hubiera barrido con todo el antiguo régimen.

Mediante una transacción imprevista los elementos revolucionarios han tenido que aceptar un orden de cosas distinto al que se pensaba y que es una derivación del antiguo régimen.

MADERO ES UN NUEVO COMONFORT. Para mayor dolor de todos los héroes, de todos los colaboradores, de todos los partidarios, de todos los adictos y de todos los simpatizadores de la revolución (dice el licenciado Molina Enríquez) ha sucedido que lo anteriormente expuesto se ha hecho por inspiración de los elementos del pasado régimen, pero por la mano misma de don Francisco Madero,

¹⁰ *Idem*, p. 76-77.

¹¹ "Tratados de Ciudad Juárez, Chihuahua", (Por los que cesan las hostilidades y se establece el compromiso de la renuncia del general Díaz), en *idem*, p. 111-112.

quien cual otro Comonfort ha buscado la pronta disolución del ejército revolucionario sin ver que con ello ha destruido el necesario instrumento para imponer las reformas, y que *él mismo se ha puesto a merced de sus enemigos*.

Que la situación por esos hombres creada no tiene salida ni las graves perturbaciones que la conducta del señor Madero ha producido, pueden tener por la vía del sufragio efectivo...

Con todo lo expuesto, concluye el licenciado Molina, debe desaparecer el régimen actual para que la revolución siga su marcha a reserva de volver al régimen constitucional cuando las circunstancias lo exijan.¹²

El Plan de Texcoco desconocía al gobierno interino presidido por Francisco León de la Barra, otorgaba facultades ejecutivas y legislativas al propio Andrés Molina Enríquez, establecía un consejo especial (compuesto por tres de las siguientes personas: Emilio Vázquez Gómez, Manuel Bonilla, Pascual Orozco, Emiliano Zapata, Camerino Mendoza, Rafael Tapia y Paulino Martínez) encargado de formar un gobierno provisional,¹³ y abría la vía para llevar a cabo una serie de reformas sociales, que se anexaban al mismo Plan.¹⁴

Tales reformas estaban contempladas en cinco decretos, que complementaban el Plan de Texcoco: a) Decreto Sobre Fraccionamiento de las Grandes Propiedades; b) Decreto Sobre la Libertad de Importación y Exportación de Cereales; c) Decreto Sobre Rancherías, Pueblos y Tribus; d) Decreto Sobre Supresión de los Jefes Políticos; y e) Decreto Sobre el Trabajo a Salario o Jornal.¹⁵

Molina fue encarcelado y tomado por loco. Ya en la penitenciaría, donde permaneció un año, tuvo la oportunidad de entrar en contacto con muchos de los revolucionarios que por entonces fueron aprehendidos y entre quienes divulgó sus ideas. Se trató, entre otros, de los generales Carrera Torres, Andrew Almazán, Balderas, Barrios, Navarro, y Villa, así como de los coroneles Castillo Tapia, Berthami, y Zamora.¹⁶

El 25 de noviembre de 1911, se proclamó en la Villa de Ayala el "Plan libertador de los hijos del Estado de Morelos, afiliados al Ejército Insurgente". Basado en consideraciones casi idénticas a las del Plan de Texcoco, el Plan de Ayala desconocía como jefe de la revolución y presidente de la República a Francisco I. Madero, reconocía como comandante en jefe de la guerra revolucionaria al general Pascual Orozco, o, en su defecto, al general Emiliano Zapata, y protestaba su adhesión al Plan de San Luis Potosí, al que incorporaba las siguientes reformas:

60. Como parte adicional del plan que invocamos, hacemos constar: que los terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques a la sombra de la justicia venal, entrarán

¹² *El Imparcial*, México, 25 de agosto de 1911.

¹³ Manuel González Ramírez (compilador), *Fuentes para la historia de la revolución mexicana*, t. I. *Planes políticos y otros documentos*, México, Fondo de Cultura Económica, 1974, p. 71-72.

¹⁴ Andrés Molina Enríquez, *op cit*, México, Ediciones Era, 1978, p. 451-452.

¹⁵ José Ángel Aguilar, *La revolución en el estado de México*, t. I, México, Biblioteca del Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, núm. 68, 1976, p. 154.

¹⁶ *Idem*, p. 157.

en posesión de esos bienes inmuebles desde luego, los pueblos o ciudadanos que tengan sus títulos, correspondientes a esas propiedades, de las cuales han sido despojados por mala fe de nuestros opresores, manteniendo a todo trance, con las armas en las manos, la mencionada posesión, y los usurpadores que se consideren con derecho a ellos lo deducirán ante los tribunales especiales que se establezcan al triunfo de la Revolución.

7o. En virtud de que la inmensa mayoría de los pueblos y ciudadanos mexicanos no son más dueños que del terreno que pisan sin poder mejorar en nada su condición social ni poder dedicarse a la industria o a la agricultura, por estar monopolizada en unas cuantas manos, las tierras, montes y aguas; por esta causa, se expropiarán, previa indemnización, de la tercera parte de esos monopolios, a los poderosos propietarios de ellos, a fin de que los pueblos y ciudadanos de México, obtengan ejidos, colonias, fondos legales para pueblos o campos de sembradura o de labor y se mejore en todo y para todo la falta de prosperidad y bienestar de los mexicanos.

8o. Los hacendados, científicos o caciques que se opongan directa o indirectamente al presente Plan, se nacionalizarán sus bienes y las dos terceras partes que a ellos correspondan, se destinarán para indemnizaciones de guerra, pensiones de viudas y huérfanos de las víctimas que sucumban en las luchas del presente Plan.

9o. Para ejecutar los procedimientos respecto a los bienes antes mencionados, se aplicarán las leyes de desamortización y nacionalización, según convenga ...¹⁷

Más abarcador que los anteriores (aunque reflejando con gran fidelidad las singularidades socio-económicas del estado de Chihuahua), el Plan de La Empacadora, de 25 de marzo de 1912, sostenía en su punto 35:

Siendo el problema **agrario** en la República el que exige más atinada y violenta solución, la Revolución garantiza que desde luego se procederá a resolverlo, bajo las bases generales siguientes:

I. Reconocimiento de la propiedad a los poseedores pacíficos por más de veinte años.

II. Revalidación y perfeccionamiento de todos los títulos legales.

III. Reivindicación de los terrenos arrebatados por despojo.

IV. Repartición de todas las tierras baldías y nacionalizadas en toda la República.

V. Expropiación por causa de utilidad pública, previo avalúo, a los grandes terratenientes que no cultiven habitualmente toda su propiedad; y las tierras así expropiadas se repartirán para fomentar la agricultura intensiva.

VI. A fin de no gravar el Erario, ni echar mano de las reservas del Tesoro, ni mucho menos aumentar con empréstitos en el extranjero la deuda exterior de la nación, el Gobierno hará una emisión especial de bonos agrícolas para pagar con ellos los terrenos expropiados, y pagará a los tenedores el interés del 4 por ciento anual hasta su amortización. Esta se hará cada diez años con el producto del pago de las mismas tierras repartidas con el que se formará un fondo especial destinado a dicha amortización.

¹⁷ Emiliano Zapata, Otilio Montaña, José Trinidad Ruíz, *et al.*, "Plan de Ayala, Morelos" (28 de noviembre de 1911), en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (compiladoras), *op. cit.* t. III, p.132-133.

VII. Se dictará una Ley Orgánica Reglamentaria sobre la materia.¹⁸

7. *Paliativos a los problemas agrícolas y agrarios*

A la par de estos desarrollos, los gobiernos que se sucedieron en las postrimerías del Estado liberal-oligárquico emprendieron algunas medidas que pretendían reducir las tensiones que se gestaban en el campo y que, de diversas formas, entrañaban una renovación de las funciones que el poder público desempeñaba en el mismo.

Una de estas medidas consistió en la reforma crediticia de 1908 y en la subsecuente fundación, en el propio año, de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura.

Hacia 1907 el sistema bancario había adquirido una importancia bastante considerable y su crecimiento era cada vez más rápido. Funcionaban en México 43 bancos nacionales, de los cuales 9 eran de concesión federal, 31, de los estados, y 3 operaban en la ciudad de México sin concesión federal. Además, había 9 sucursales de la banca extranjera.¹⁹

En torno de las concesiones bancarias federales y estatales habían cristalizado grupos financieros distintos. En efecto, alrededor de las primeras, se había nucleado el grupo financiero *Científico*, que controlaba las dos instituciones de crédito más influyentes de la época (el Banco Nacional de México y el Banco de Londres y México) y que resultaba beneficiado con la política centralizadora que impulsaba el gobierno de Porfirio Díaz. Alrededor de las segundas, se habían formado una treintena de grupos financieros locales, que resultaban perjudicados con las medidas centralizadoras que animaban a la administración porfirista.²⁰

Así, tras la promulgación de la Ley General de Instituciones de Crédito, en 1897, los dos bancos capitalinos ya aludidos quedaron en condición de establecer sucursales en todas las entidades federativas del país. En cambio, los bancos de provincia no pudieron, por impedimentos de dicha ley, hacer lo propio. Con ello, las transacciones y la circulación de los billetes de los bancos de los estados enfrentaron una infinidad de trabas, y tendieron a reducirse a sus respectivas localidades. El natural descontento de los grupos financieros de provincia condujo a la creación, en 1899, del Banco Central Mexicano, cuya función, a pesar de su nombre, se limitó a servir de agente de cambio de los billetes de los bancos de los estados, haciendo de esta manera federal su circulación.²¹

¹⁸ Pascual Orozco, J. Inés Salazar, Emilio P. Campa, *et al.*, "Plan de la Empacadora, Chihuahua" (25 de marzo de 1912), en *idem*, p. 147-148.

¹⁹ Leonor Ludlow, "Estructura industrial, comercial y financiera", en *Así fue la revolución mexicana. Tomo I. Crisis del porfirismo*, México, Senado de la República-Secretaría de Educación Pública, 1985, p. 27-28.

²⁰ Todos los bancos de la época eran privados, pero se hallaban sujetos a la reglamentación y supervisión de la Secretaría de Hacienda. A falta de un banco público central, el Banco Nacional de México hacía las veces del caso. Con sede en la ciudad de México, la plaza comercial y financiera más importante del país, éste contaba con una amplia red de agencias y sucursales en toda la República; era uno de los vehículos para la recaudación fiscal, para lo cual detentaba el monopolio de la circulación en las oficinas federales; tenía una cuenta corriente al gobierno federal y era un influyente agente intermediario en las transacciones de la deuda pública. Véase: *idem*, p. 26.

²¹ Así y todo, la inestabilidad financiera que se produjo en los años de 1907 y 1908, obligó al Banco Central Mexicano a cerrar sus puertas en 1909.

De otra parte, la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 definía con toda claridad el tipo de funciones que los bancos podían realizar y distinguía con precisión tres tipos de empresas: las de emisión, las refaccionarias y las hipotecarias. Hacia 1907 estaban registrados, bajo concesión federal, 2 bancos de emisión, 1 banco refaccionario y 7 bancos hipotecarios. Bajo concesión de los estados había 28 bancos de emisión y 3 bancos refaccionarios.²²

Como se aprecia, la mayoría de los bancos eran de emisión. A pesar de ello, éstos habían convertido el mayor número de sus funciones en operaciones de tipo hipotecario y habían seguido la práctica de aumentar sus créditos a los grandes hacendados, al otorgar la renovación automática de los préstamos a corto plazo, hasta hacer de éstos obligaciones permanentes. Sin embargo, con la escasez de fondos que se suscitó en 1907 (debida a la crisis económica internacional y a la contracción de la demanda interna) el margen de seguridad de los bancos fue puesto en peligro. Estos se vieron obligados a restringir sus créditos en forma brusca, a elevar sus tasas de interés y a tratar de hacer efectiva la enorme deuda acumulada por los hacendados.

En este punto, el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, promulgó en febrero de 1908 una reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito, con el fin de reglamentar con mayor precisión y rigidez el carácter de las operaciones bancarias. Así, se prohibió a las instituciones emisoras que inmovilizaran sus carteras, dejándoles la opción de transformarse en empresas refaccionarias; se prohibió, asimismo, que se otorgaran nuevas concesiones hasta que no se estabilizara el mercado crediticio, y se ampliaron los privilegios de que gozaba el Banco Nacional de México, al permitírsele la apertura de nuevas sucursales en el país.²³

Todo ello derivó en un doble conflicto; el que se suscitó entre el grupo financiero de la capital del país y los grupos financieros de los estados, y el que se produjo entre la administración porfirista y la gran mayoría de los hacendados, que es el que aquí nos interesa.

Ciertamente, en medio de un ambiente de especulación y zozobra, Toribio Esquivel Obregón escribió varios artículos sucesivos con el título "La Circular de la Secretaría de Hacienda a las Instituciones de Crédito", que aparecieron en el periódico *El Tiempo*, de la ciudad de México, a partir del 13 de marzo de 1908, en los que puede leerse parte de esta querrella. Su autor expresó en ellos los intereses de los grandes terratenientes, en su condición de deudores de los bancos. Los bancos de emisión —sostenía Esquivel Obregón— eran de hecho agrícolas, por lo que la circular suscrita por el secretario de Hacienda el 10 de febrero de 1908, que anunció el propósito gubernamental de modificar la función de los bancos de emisión, prohibiéndoles hacer préstamos a largo plazo, como lo venían haciendo, constituía un golpe a los agricultores y un atentado a la ciencia económica, pues la base del crédito en México seguía siendo la propiedad raíz.²⁴

²² *Idem*, p. 27-28.

²³ *Idem*, p. 32.

²⁴ Luis Chávez Orozco, *La crisis agrícola de México en 1908, en su aspecto crediticio*, México, Banco Nacional de Crédito Agrícola, 1954, p. 1-5.

De esta suerte, ante la amenaza de tener que liquidar perentoriamente sus adeudos con los bancos, los hacendados presionaron intensamente al gobierno de Díaz, hasta obtener de éste una satisfacción: se mantuvo la reforma crediticia del 10 de febrero de 1908, pero se creó la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura, con fondos aportados por el gobierno federal y los bancos Nacional de México, de Londres y México, Central Mexicano, y Mexicano de Comercio e Industria.

Como era de esperar, la función principal de la Caja de Préstamos consistió en absorber la cartera vencida de los bancos de emisión. Así, hasta el 30 de junio de 1912, la Caja había colocado préstamos por valor de 28 733 000 pesos, de los cuales sólo una reducidísima parte había sido aplicada a ejecutar obras de riego. La mayor parte de esa cuantiosa suma destinada a la amortización del pasivo que los hacendados tenían con los bancos de emisión.²⁵ Con todo, la existencia misma de la Caja de Préstamos abrió al gobierno federal una nueva vía de acción, que le permitía, al menos legalmente, impulsar la modernización de la agricultura por medio de una asignación discriminada del crédito, con base en una escala de prioridades y condiciones.

Además del problema crediticio, a finales del porfirismo se hicieron evidentes los conflictos provocados por las políticas de baldíos y deslindes, aplicadas desde la octava década del siglo pasado. Aduciendo falta de datos sobre los terrenos nacionales, así como las irregularidades que por tal causa estaban ocurriendo en las transacciones sobre esta clase de predios, el presidente Díaz suspendió, el 27 de julio de 1909, las ventas de dichos terrenos. En consecuencia, inició ante el Congreso de la Unión una ley que suspendía las denuncias de terrenos baldíos y autorizaba la creación de una Comisión Agraria, con el propósito exclusivo de rectificar, mensurar e inventariar debidamente este tipo de bienes nacionales. Aprobada por el Congreso, la nueva ley se promulgó por decreto del 29 de diciembre de 1909.²⁶ Para desgracia del gobierno porfirista, éstos y otros paliativos resultaron tardíos e insuficientes.

Tras de acceder al gobierno de la República, el presidente Madero resolvió ampliar (a través de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria) las medidas para enfrentar el problema agrario. Así, además de rectificar, mensurar e inventariar los terrenos nacionales, se propuso mejorar la distribución de la propiedad territorial, para lo cual pensó en vender tierras nacionales y en adquirir propiedades de particulares para fraccionarlas.²⁷

Para tales propósitos se creó la llamada Comisión Nacional Agraria, primero²⁸ y Comisión Agraria Ejecutiva, después.²⁹ Esta quedó integrada por algunos técnicos y, sobre todo, por prominentes hacendados

²⁵ Marte R. Gómez, *Historia de la Comisión Nacional Agraria*, México, Centro de Investigaciones Agrarias, Secretaría de Agricultura y Ganadería, 1975, p. 40.

²⁶ *Idem*, p. 25.

²⁷ Rafael Hernández, *Política agraria*, México, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, 1912, 40 p., *passim*.

²⁸ Francisco I. Madero, "Informe del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, pronunciado ante la XXV Legislatura con Motivo de la Apertura de Sesiones Ordinarias" (1 de abril de 1912), en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa (compiladoras), *op. cit.*, t. III, p. 162-163.

²⁹ Francisco I. Madero, "Informe del Presidente Constitucional de los Estados Unidos

vinculados con el grupo *Científico*; a saber: Roberto Gayol, Leopoldo Palacios, Manuel Marroquín y Rivera, Fernando Duret, Carlos Robles, Oscar Braniff, Manuel Araos, Angel Vivanco, Nicolás del Moral y Antonio V. Hernández. Su secretario fue José M. de la Garza.³⁰ A pesar de su nombre, la Comisión no llevó a cabo más que estudios e iniciativas para la resolución del problema agrario, fechados en 1912.

El programa de la Comisión recomendaba la conservación y el fomento de los bosques; la reglamentación y el mejor uso de las aguas; la extensión de las áreas en explotación y el incremento de los cultivos; el mejoramiento de las vías de comunicación; la ampliación del crédito agrícola; el fomento de la ganadería y las agroindustrias y, por último, el mejoramiento de la distribución de la propiedad de la tierra. Sobre este último aspecto se ocupó un dictamen de la propia Comisión, que proponía los siguientes principios generales:

La idea fundamental que conviene tomar como base de cualquier solución pronta, debe ser la de que sus efectos se perciban en una extensión del territorio nacional tan grande como sea posible, porque si la acción del gobierno se limita demasiado, excitará los celos y las pasiones que utilizan los agitadores para aumentar la intranquilidad en las regiones donde no alcancen desde luego las medidas que se tomen.

La compra de terrenos para su fraccionamiento no satisface a esta condición fundamental, y es además un medio muy costoso cuya aplicación requiere tiempo y mucho estudio para que no resulte un fracaso en que se comprometan enormes sumas de dinero que vayan a quedar en poder de los especuladores, sin que el país reciba por ello ningún beneficio proporcionado.

Varios peligros ofrecen la compra inmediata de terrenos; uno de ellos es el de que bastó iniciar la idea de que el gobierno intentaba adquirir algunas propiedades, para que hiciese explosión la codicia de los especuladores, a quienes ciega esta pasión hasta el punto de que no vacilan en aprovechar la crisis por la cual atraviesa nuestro país, para venir haciendo proposiciones en las que, por lo bajo, triplican el valor de terrenos improductivos que son una carga para sus actuales poseedores y que, sin embargo, los que las proponen sueñan ya en convertir hoy en vehículo para llenar sus cajas con torrentes de oro que saldrán del Tesoro Público y de la Caja de Préstamos; dos frentes que suponen muy fácilmente explotables, en las actuales circunstancias, y es digno de anotarse el hecho de que no se viene a proponer la venta de buenas fincas que son productivas, por cuya razón sus actuales poseedores están satisfechos de ellas, sino que, con excepción de las haciendas de Morelos, profundamente perturbado ahora, todas las demás proposiciones se refieren a terrenos que son improductivos por varias circunstancias.

Los terrenos nacionales no son tampoco inmediatamente realizables: primero, porque no están bien deslindados; su simple localización demanda tiempo, trabajo y dinero, y segundo, porque para que sea costeable su explotación, lo mismo que en el caso de los terrenos de bajo precio de propiedad particular, se requiere un estudio minu-

Mexicanos, pronunciado ante la XXVI Legislatura con Motivo de la Apertura de Sesiones Ordinarias" (16 de septiembre de 1912), en *idem*, p. 182-183.

³⁰ Marte R. Gómez, *op. cit.* p. 33.

cioso de sus condiciones sanitarias, agronómicas, topográficas, hidrográficas y meteorológicas, y para ese estudio, además de un personal numeroso y gruesas sumas de dinero, se necesita disponer de un tiempo que sale de los límites que fija la premura con que se requiere satisfacer la impaciencia de los interesados en que se dé al problema agrario una solución práctica inmediata.

Tomando en cuenta la idea fundamental que anunciamos al principio, el carácter de nuestra población y su amor al terruño que la arraiga con fuerza incontrastable, creemos que al programa de la Comisión Nacional Agraria conviene agregar las *medidas que tiendan a reconstruir los ejidos de los pueblos*, excluyendo solo aquéllos que por ser capitales, cabeceras de distrito o bien por su industria o manera de vivir, no la requieran, y *esa reconstrucción se debe hacer bajo la forma de propiedad comunal*, modificando la legislación vigente en cuanto sea necesario, para corregir los excesos a que se llevó la aplicación de principios benéficos que impuso: la necesidad de salvar a la sociedad de los males que le producía el acaparamiento de la riqueza pública y de la propiedad territorial por los gremios que gozaban de riquezas, fueros, exenciones y privilegios que los hacían más poderosos que el gobierno mismo.

La reconstitución de los ejidos bajo la forma comunal, *con su carácter de inalienable*, además de las razones que en su apoyo se acaban de señalar, subsana ciertas dificultades que conviene tomar en cuenta, porque son muy importantes.

Una de ellas, muy esencial, es la de que al restablecer los ejidos, para utilizar los terrenos de que están formados, no hay que promover una emigración de pobladores, pues si los terrenos que se han de aplicar a una comunidad están lejos del lugar en que ésta reside, en primer lugar, la mayoría opondrá grandes resistencias para desalojarse, porque el apego al terreno es una de las características de nuestra población que no es emigrante; en segundo lugar, el transporte y el establecimiento de grandes grupos humanos es muy costoso; la nación no cuenta con los elementos que demandaría este solo detalle, si hubiese de satisfacer por este medio los deseos y aspiraciones de las masas que esperan que el problema agrario se resuelva en su favor; en tercer lugar, el desalojamiento de grandes masas de población traería consigo un desequilibrio, una perturbación de los elementos de trabajo ya establecidos, y ese desequilibrio pudiera ocasionar una crisis peligrosa; en cuarto lugar, si se aleja un grupo de trabajadores del lugar en que residen, pierden los elementos con que ahora cuentan para subsistir, que deben ser algunos, puesto que viven, y tendría la nación que sostener una carga pesadísima, si bajo su responsabilidad se lleva con la promesa de mejorar sus condiciones, a grandes masas humanas que, por muy distintos motivos, pueden no contribuir a que se realicen los propósitos que el gobierno tiene, pues bastará la nostalgia del terruño para desalentar a muchos que volverían a sus tierras más pobres, más desalentados para sostener la lucha por la vida; en quinto lugar, en la gran masa de la población que solicita tierras, la mayoría de los componentes carecen de aptitudes para ser propietarios y cumplir compromisos personales, mientras que si cumplirán los que contraigan colectivamente, y la explotación de terrenos comunales se hará en una forma tal, que sólo disfruten de ellos los que sean trabajadores, los que cultiven y utilicen debidamente las parcelas que les correspondan.

Conviene instituir una comisión de peritos legistas que analice las

reclamaciones de los pueblos que se quejan de haber sido despojados de sus ejidos por actos de autoridad.³¹

En la Cámara de Diputados de la XXVI Legislatura federal, compuesta por maderistas y exporfiristas, no faltaron quienes procuraron inyectarle vigor al gobierno que presidía Francisco I. Madero. Así, Miguel Alardín presentó el 12 de octubre de 1912 un proyecto de ley fiscal, que buscaba presionar a los grandes hacendados a cultivar la totalidad de sus propiedades, mediante la imposición de contribuciones diferenciales a los terrenos explotados y a los inexplotados.³² Por su parte, Juan Sarabia puso a discusión el 24 de octubre de ese año un proyecto de ley agraria, que proponía el establecimiento de tribunales federales de Equidad, que resolvieran sobre las restituciones de tierras, montes y aguas a los pueblos; que se declarara de utilidad pública la expropiación, previo avalúo e indemnización, de ciertos bienes raíces para reconstruir los ejidos de los pueblos; que se modificara la Constitución General de la República en lo conducente, y que se expidiera una ley reglamentaria sobre la materia, que, entre otros aspectos, fijara un límite máximo a la gran propiedad territorial.³³ Finalmente, Luis Cabrera, el más lúcido y el mejor informado de los diputados del bloque renovador, pronunció el 3 de diciembre de 1912 un célebre discurso en el que apoyó la iniciativa que declaraba de utilidad pública la reconstitución de los ejidos de los pueblos.³⁴ Al hacer uso de la palabra, Cabrera hizo ver que del rechazo o de la aceptación de la iniciativa que promovía, dependía que se acentuara la intranquilidad que imperaba en el país o bien, que se consolidara la paz. La iniciativa de referencia, que firmaron junto con el licenciado Cabrera 62 diputados, pasó al conocimiento de la Comisión Agraria Ejecutiva.³⁵

No obstante, el proyecto de ley agraria del 3 de diciembre de 1912 fue hecho a un lado por el propio secretario de Fomento, Colonización e Industria, licenciado Rafael Hernández, quien obtuvo de la Cámara, en su sesión del día siguiente, que se diera preferencia al dictamen que presentaron las comisiones unidas 2a. y 3a. de Crédito Público, en el que se consultaba si era de autorizarse al Ejecutivo para adquirir acciones de la Caja de Préstamos para Obras de Irrigación y Fomento de la Agricultura y se evaluaba el "Proyecto de Ley para Favorecer el Riego y Fraccionamiento de Tierras, y para Preparar la Organización del Crédito Agrícola en la República".³⁶ Iniciativas, ambas, que obedecían a los intereses de los grandes hacendados, quienes pretendían beneficiarse de los fondos públicos. En efecto, el dictamen autorizaba a la Caja de Préstamos para elevar hasta 206 000 000 de pesos sus emisiones de bonos u obligaciones. Apoyado por diputados exporfiristas (como

³¹ Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, *Trabajos e iniciativas de la Comisión Agraria Ejecutiva*, México, Imprenta y Fototipia de la Secretaría de Fomento, Colonización e Industria, 1912, p. 5-14. (Los subrayados en el texto son nuestros.)

³² Miguel Alardín, "Proyecto de Ley Fiscal" (12 de octubre de 1912), en Graziella Altamirano y Guadalupe Villa, *op cit*, III, p. 201-212.

³³ Juan Sarabia, "Proyecto sobre cuestión agraria presentado a la XXVI Legislatura" (24 de octubre de 1912), en *idem*, p. 213-229.

³⁴ Luis Cabrera, "Discurso pronunciado ante la Cámara de Diputados sobre la reconstitución de los ejidos de los pueblos como medio de suprimir la esclavitud del jornalero mexicano" (3 de diciembre de 1912), en *idem*, p. 231-266.

³⁵ *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, XXVI Legislatura, federal*, diciembre de 1912.

³⁶ *Idem*.

Manuel Sierra Méndez, Francisco Bulnes, Ricardo Molina, M. Lanz Duret, J. R. Aspe, Vicente Luengas, J. Antonio Pliego Pérez y Andrés Sánchez Juárez), el dictamen contó asimismo con la aprobación de los diputados del bloque renovador, quienes estaban en franca minoría.³⁷ Ante estos hechos, el diputado Luis Cabrera solicitó en la sesión del 13 de diciembre de 1912 que se le concediera licencia para separarse de su cargo por tiempo indefinido.³⁸

Tras el golpe militar de febrero de 1913, el general Victoriano Huerta se propuso imponer la paz a cualquier precio. Para ello envió emisarios a los insurrectos del norte y del sur y, aunque logró atraer a las ya muy desgastadas fuerzas que encabezaba Pascual Orozco, no obtuvo sino el desprecio de las que jefaturaba Emiliano Zapata. No por ello dejó Huerta de proponer diversas iniciativas agrarias que, aunque no estaban encaminadas a satisfacer las demandas de los campesinos, sino por el contrario, a rodear de garantías a las grandes haciendas y a las viejas compañías deslindadoras de terrenos, sí pretendían generar la ilusión de que su gobierno estaba dispuesto a llegar al fondo de la cuestión agraria.

Así y de conformidad con el punto segundo del “Pacto de La Ciudadela” (que estipulaba: “... será creado un nuevo Ministerio, que se encargará de resolver la cuestión agraria y ramos anexos, denominándose de Agricultura y encargándose de la cartera respectiva el licenciado Manuel Garza Aldape...”),³⁹ el general Huerta envió el 20 de mayo de 1913 a la Cámara de Diputados la iniciativa relativa a la creación de la Secretaría de Agricultura, a la que se asignaban los ramos de Tierra, Aguas, Bosques, Ganadería, Avicultura y Apicultura, Caza, Pesca, Colonización, y otros.⁴⁰ Medida que fue ampliamente publicitada. También llegó a ocupar los encabezados de muchos periódicos el “Proyecto de Ley para Incrementar el Fraccionamiento de la Propiedad Rural”, que elaboró el licenciado Toribio Esquivel Obregón desde la Secretaría de Hacienda y turnó a la Cámara de Diputados el 9 de abril de 1913, en el que se autorizaba al Ejecutivo para que garantizara los bonos emitidos por las empresas fraccionadoras de terrenos, o en los bonos destinados a las propias empresas.⁴¹

A pesar de estas apariencias, el régimen huertista no veía como una necesidad apremiante la reconstitución de los ejidos de los pueblos y la afectación (así fuera parcial) de la extensión de las grandes haciendas. Y era así, por distintas razones. En primer lugar, recordemos que tras el cuartelazo de febrero de 1913 se ocultaba el miedo que las movilizaciones y los conflictos obreros (que se sucedieron a escala nacional a lo largo del año de 1912) habían despertado en los políticos exporfiristas, los militares de alta jerarquía, la burguesía nacional y extranjera, y los grandes terratenientes. Miedo que, transmutado en auténtico pánico, unificó a las clases dominantes en un solo propósito: restaurar el orden. En segundo término, tengamos presente que hasta bien entrado el año de 1913 las protestas y revueltas agrarias eran poco numerosas, estaban

³⁷ *Idem.*

³⁸ *Idem.*

³⁹ Victoriano Huerta y Félix Díaz, “Pacto de La Ciudadela” (18 de febrero de 1913), en Jesús Silva Herzog, *Breve historia de la revolución mexicana*, I, México, Fondo de Cultura Económica, 1972, p. 347-348.

⁴⁰ *Diario de los Debates de la Cámara de Diputados. XXVI Legislatura federal*, mayo de 1913.

⁴¹ *Idem.*, abril de 1913.

muy limitadas en sus alcances y alianzas, y representaban, a lo sumo, problemas regionales. Por último, mas no por ello menos importante, no olvidemos que los grandes hacendados ocuparon, desde un inicio, una posición relevante en la coalición política huertista, que se volvió de primer orden conforme se fue desintegrando el bloque dominante de febrero de 1913. El caso fue que el gobierno de Victoriano Huerta centró toda su atención en el conflicto industrial y relegó a un segundo plano la solución de los problemas agrarios.

De acuerdo con él, el futuro de México estaba cifrado en su pacificación e industrialización. Para alcanzar tales objetivos se hacía necesario modernizar las relaciones entre el capital y el trabajo, reglamentándolas e institucionalizándolas, para prevenir los conflictos, la agitación y la anarquía. En todo caso, la modernización de las relaciones laborales se haría extensiva, en su oportunidad, a los sectores agrarios. Pues, ¿cuáles eran los problemas del campo? Los que *El Economista Mexicano* había planteado en infinidad de ocasiones: la servidumbre, la sujeción a la gleba, la precariedad de las relaciones salariales, etcétera. ¿Qué hacer, entonces? Llevar los beneficios de las leyes laborales al agro para garantizar, así, la libertad de trabajo, salarios mínimos, jornadas máximas, condiciones dignas, higiénicas y seguras de trabajo y otros. En fin, como se apreciaba, nada que tuviera que ver con la redistribución de tierras, bosques y aguas entre la población rural.

Sea como fuere, todas las medidas agrícolas y agrarias que adoptó el régimen del general Huerta fueron declaradas nulas por acuerdo del 29 de agosto de 1914, cuando Venustiano Carranza, primer jefe del Ejército Constitucionalista, entró en la capital de la República.

8. Transformación y potencial revolucionario

La relación entre los aparatos públicos de dominación y los campesinos mexicanos asumió una modalidad específica con la instauración y consolidación del primer Estado nacional, que rigió de 1856 a 1914, y cuya forma hemos definido como liberal-oligárquica.

En efecto, con la expedición de la Ley Lerdo (1856), de la Constitución liberal (1857) y de las leyes de nacionalización (1859), el Estado mexicano puso fin a los derechos corporativos de propiedad y desarticuló a cerca de cincuenta tipos de estos cuerpos, entre los que se encontraban la Iglesia, las comunidades étnicas y el patrimonio comunal de los ayuntamientos de pueblos, villas y ciudades. Los bienes de las corporaciones eclesiásticas y civiles se adjudicaron en propiedad privada a particulares a través de distintos mecanismos. Además, las leyes de colonización que se dictaron en 1863, 1875, 1883 y 1894, auspiciaron el traslado de la propiedad raíz pública a manos privadas.

De esta suerte, las haciendas y los ranchos que pertenecían a la Iglesia, así como las tierras de las corporaciones indígenas, fueron directamente afectadas. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con las haciendas que estaban en poder de propietarios privados. La hacienda laica fue la única institución colonial que sobrevivió a la revolución liberal, aunque tuvo que operar en un nuevo cuadro histórico, radicalmente distinto. Por primera vez vivió la hacienda mexicana dentro del marco de un capitalismo en expansión, muy ligado a la economía internacional de la segunda revolución industrial, lo que proporcionó incesantes estímulos a su ampliación económica y física.

Con ello tuvo lugar una fractura en la simbiosis que anteriormente

privaba entre las haciendas y los pueblos (particularmente notoria en el centro de México), así como una alteración de la lógica económica de las propias haciendas.

En lo que hace a lo primero, los antiguos comuneros (convertidos en minifundistas privados), carentes, por ende, de recursos de defensa corporativa, quedaron en enorme desventaja económica, social y política frente a las grandes propiedades territoriales que los circundaban. Esta situación fomentó la adquisición de títulos de propiedad de los pequeños campesinos por parte de los grandes hacendados. Este fenómeno se vio acompañado, por añadidura, con expropiaciones y despojos agrarios, ya en un plano ilegal, cuyas víctimas fueron los propios minifundistas de los antiguos pueblos y comunidades. En lo que toca a lo segundo, se produjo una creciente especialización y comercialización de los géneros de las haciendas, un debilitamiento de sus capacidades de autoabasto, una marcada reducción de sus sectores de explotación indirecta y de reserva, y una tendencia hacia su expansión territorial.

Estas mutaciones suscitaron ciertos cambios en las relaciones de producción que caracterizaban a las haciendas y que se podrían resumir de la siguiente manera. En primer lugar, los trabajadores permanentes de las fincas (dependientes y peones endeudados) tendieron a perder peso e importancia en relación con los trabajadores ocasionales o estacionales. En segundo lugar, se registraron múltiples intentos por sustituir la tradicional forma de pago de los trabajadores permanentes con el salario jornalero, todo en efectivo y semanalmente cubierto. Así, se eliminaron los pagos en especie, el mecanismo de la cuenta anual y el endeudamiento de los peones. Sin embargo, la reducción a salario de estos trabajadores no fue completa, pues además del salario que se les empezó a pagar, se les cedieron porciones regulares de tierra de las propias haciendas para que las cultivaran en provecho propio, a cambio de la obligación de laborar permanentemente en los fundos. En tercer lugar, los trabajadores de los sectores de explotación indirecta de las haciendas (arrendatarios, aparceros, colonos, precaristas) tendieron a ser expulsados, en la medida en que las tierras que antes usufructuaban iban siendo incorporadas a los sectores de explotación directa de las fincas. En adelante, estos trabajadores habrían de buscar empleo como jornaleros. Finalmente, como ya se ha dicho, la expansión física de muchas haciendas se efectuó a costa de ranchos y minifundios colindantes o aledaños, cuyos propietarios fueron desposeídos por distintos medios y obligados, en consecuencia, a engrosar las filas de los jornaleros.

Se fue gestando así un proletariado rural, caracterizado por una movilidad geográfica muy grande para los cánones de la época y por ser ajeno a las modalidades de la dominación patriarcal a la que estaban sujetos los peones residentes en las haciendas. Ya a la vuelta del siglo, los jornaleros de campo representaban una proporción muy superior a la que hacían los trabajadores permanentes de las fincas, al menos, en las regiones más capitalizadas y dinámicas del país. *Fue justamente este sector del campesinado, situado al margen de los aparatos de control de las haciendas y del Estado, el que constituyó la fuerza principal de la vertiente agraria de la revolución que estalló en 1910.*

En conclusión, el Estado liberal-oligárquico se valió de sus aparatos legal, judicial, fiscal y militar en su relación con los campesinos. Así y todo, por sus remanentes notabillarios y por su respeto a la institución hacendaria el Estado delegó en los grandes terratenientes (*de facto* o de manera disfrazada) una serie de atribuciones públicas, como el control

ideológico, social, político y (hasta cierto punto) militar, de la población rural. De suerte que los aparatos encargados de ejercer la dominación en el campo eran, en primera instancia, privados y no públicos. Ahora bien, las transformaciones que experimentaron las grandes haciendas a partir de la revolución liberal de mediados del siglo XIX hicieron que éstas perdieran, progresivamente, su eficacia en el control de la población rural, pero sin que esta deficiencia fuera cubierta por el Estado. Las insurrecciones que se sucedieron entre 1911 y 1914 pusieron en acción una fuerza que, estructurada primero en partidas rebeldes y luego en ejércitos populares, destruyó al Estado liberal-oligárquico. Estos movimientos agrarios continuaron (aunque en oleadas decrecientes y bajo novedosas formas organizativas) durante veinticinco años más, hasta que la gran hacienda desapareció de la faz del campo mexicano.